

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2188-2021
CARATULADO : MEDINA/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE
DEFENSAL DEL ESTADO

Santiago, nueve de Agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS:

A **folio 1**, con fecha 27 de febrero de 2021, comparece Carlos José Valdés Errázuriz y Raúl Andrés Rogers Señoret, abogados, en representación de **Ricardo Domingo Medina Contreras**, con domicilio en Compañía de Jesús N°1555, oficina 310, comuna y ciudad de Santiago, quien deduce demanda (la que fue rectificadora a folios 14 y 16) en contra del **Fisco de Chile**, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, ambos domiciliados en Agustina N°1687, comuna de Santiago.

Exponen que su representado es hijo de don Domingo Manuel Medina Riquelme, ejecutado político, fallecido en octubre de 1973, quien al momento de su fallecimiento tenía 25 años, estaba casado y era padre de 3 hijos. Ejercía su oficio de electricista y carecía de militancia política conocida.

Explican que el padre del actor fue detenido en la madrugada del 15 de octubre de 1973 junto a su hermano, en su domicilio ubicado en Villa Francia, por una patrulla compuesta por 5 militares y 1 carabinero.

Refieren que el mismo 15 de octubre fue ejecutado el padre del actor, a las orillas de un canal en Santa Ana de Chena.

Manifiestan que la Comisión Rettig llegó a la convicción de que la patrulla llevó a los detenidos hacia la parcela 68 del camino a Lonquén en el sector de Santa Ana de Chena. En ese lugar los colocaron al borde de un canal de regadío, disparándoles, cerca de las 11:00 horas del mismo día. Domingo Riquelme murió a consecuencia de los impactos de bala y su cuerpo fue arrastrado por el agua. Su hermano quedó herido y logró escapar.

Precisan que, según el protocolo de autopsia de la víctima, la causa de muerte son múltiples heridas de bala.

Por lo anterior, la Comisión llegó a la convicción de que Domingo Medina Riquelme fue víctima de violación grave a los derechos humanos, al ser ejecutado por agentes del Estado.

Afirman que el Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKRYXPXDGVH

Explican que, consecuencia directa del homicidio calificado del padre de su representado, éste ha sufrido un profundo daño moral que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo. La pérdida de un ser querido es siempre un hecho doloroso, y en este caso es su progenitor; pero lo es aún más cuando es producto de una violencia irracional, aplicada, tal cual ocurre con las situaciones en comento, como un castigo a quienes eran adherentes al proyecto político que representaba el gobierno de la Unidad Popular.

Expresan que la forma alevosa y con ensañamiento en que don Domingo Medina Riquelme fue detenido en su domicilio, secuestrado y ejecutado por Agentes del Estado, quienes posteriormente hacen desaparecer su cuerpo, fue muy violenta para su familia, quienes desde un principio se ven impedidos de velarlo y darle sepultura dignamente frustrando toda posibilidad de expresar y compartir el dolor. Asimismo, la impunidad de los autores, cuya identidad de algunos se conoció poco después de producidos los hechos; la imposibilidad durante muchos años de acceder a la justicia ya que el Estado utilizó a su arbitrio distintos medios para impedir que se acreditara legalmente la verdad de lo sucedido, ya que las autoridades sostuvieron oficialmente que las víctimas habían intentado fugarse, versión que sólo hace pocos años se ha establecido judicialmente como falsa; la violenta e irrecuperable ruptura de los lazos afectivos y el efecto traumático de la misma, son algunas de las situaciones que han significado un dolor permanente y un duelo sin terminar.

Manifiestan que el dolor causado la familia del actor fue traumático, insoportable de ver como un ser querido por solo el hecho de pensar distinto fue detenido ilegalmente, secuestrado y asesinado, en forma artera y cobarde por quienes ostentaban el monopolio de la fuerza, y quienes aprovechando la condición humilde de la familia del señor Medina, sabiendo que además y dadas las circunstancias del momento, su acceso a la justicia iba a ser nulo, abusaron impunemente de su superioridad y sin más lo fusilan y arrojan su cuerpo a un canal de regadío, siendo arrastrado por el agua.

Precisan que la muerte de su padre afectó significativamente al actor, ya que al momento de los hechos era sólo un niño de sólo 5 años de edad, dañándolo no sólo emocionalmente sino también económica y socialmente, dado que el padre era el soporte económico familiar. En adelante el temor lo embargó, salía lo preciso de su hogar, sintió la soledad de no sentirse apoyado por cercanos, quienes también por temor se alejaron de la familia.

En virtud de lo expuesto, avalúa el daño moral ocasionado en la suma de \$300.000.000.-



Por lo anterior, previas citas legales, solicitan tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios, acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por el homicidio calificado de don Domingo Manuel Medina Riquelme por la suma de \$300.000.000 más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

A **folio 20**, con fecha 19 de mayo de 2023 se notificó la demanda al Consejo de Defensa del Estado.

A **folio 21**, con fecha 9 de junio de 2023, compareció doña **Carolina Vásquez Rojas**, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del **Consejo de Defensa del Estado**, por el **Fisco de Chile**, quien contestó la demanda interpuesta por el demandante, solicitando su total rechazo, con costas.

En primer lugar, opone excepción de reparación integral del daño: alega la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias solicitadas, por haber sido indemnizado el demandante.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Explica que la Ley 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare o renunciare, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-



En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Arguye que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Sostiene que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto.

Expone que, además de la indicada pensión, tanto la Ley 19.123 como la 19.980 consagran otras transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

En primer lugar, y de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.123, se entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce meses de pensión. Para el caso que se solicite hoy, por ejemplo, esa compensación equivaldría a \$2.520.000.- En la misma línea, la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de \$10.000.000.- para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación, y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron, pero han dejado de percibirla. Finalmente, los hijos de los causantes que se encuentren cursando estudios media jornada tendrán derecho a un subsidio mensual equivalente a 1.4 UTM, esto es, al día de hoy \$ 88.568.-

Agrega que la ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos:

a) a) Todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las *prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos*. En general este tipo de beneficios han sido agrupados en el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Ciertamente, dicho programa es parte de una Política Pública de Reparación asumida por el Estado de Chile con las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1990, según se dispone en las leyes 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. En este sentido, las personas acreditadas como beneficiarias del Programa, tiene derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red asistencial pública,



independiente de la previsión social que sostengan, accediendo a toda la oferta de atención de salud que otorga el sector.

0 b) Los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. Esta beca se encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años de edad. En cuanto a la duración del beneficio, tratándose de aquellas carreras con una duración inferior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta un semestre adicional. Para aquellas carreras con una duración igual o superior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta dos semestres adicionales.

b Asimismo, dichos beneficios podrán extenderse hasta por un año, inmediatamente posterior al egreso de los estudios de nivel superior, cuando se requiera rendir un Examen de Grado o Licenciatura, o presentar una Memoria para su aprobación, siendo éste beneficio complementario a la extensión semestral de los beneficios educacionales.

0 Destaca también la existencia de reparaciones simbólicas, a saber: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKRYXPXDGVH

Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

c Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

o Asegura que, de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

d Así las cosas, sostiene, tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

o En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato del actor, el homicidio de la víctima ocurrió el 15 de octubre de 1973, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 19 de mayo de 2023, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, solicitando se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

e En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los supuestos derechos a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.



f Agrega que en el derecho internacional de los derechos humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

g Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

h En cuanto al daño reclamado, y en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, su parte controvierte expresamente el monto del daño moral demandado, en cuanto a su naturaleza así como a su excesivo monto, haciendo presente que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificándolo, en términos económicos, como el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente de satisfacción.

i Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.

j En forma subsidiaria, indica que la regulación del daño moral se debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, agregando que, de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

k Finalmente, hace presente que los reajustes e intereses sólo pueden devengarse en el caso que se dicte sentencia que acoja la demanda y establezca esa obligación, sin embargo, mientras aquella no se encuentre firme y ejecutoriada



en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que, tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

l Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

m A **folio 25**, con fecha 22 de junio de 2023, la demandante evacúa el trámite de réplica.

En cuanto a la excepción de reparación integral del daño causado, manifiesta que, en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por el demandante en su calidad de hijo de una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales cometidas por agentes del Estado, su propio padre.

Con todo, destaca que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Recalca que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24, entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comentario incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción de reparación integral, o de pago, invocada por el Fisco. Así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, sostiene que resulta jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional,



administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema. Así, la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos.

En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

En cuanto a los reajustes solicitados, destaca que es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que, procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, puesto que, este es el momento procesal en que queda fijada la pretensión.

A **folio 28**, con fecha 10 de julio de 2023, se tuvo por evacuada la dúplica en rebeldía de la demandada.

A **folio 37**, con fecha 26 de septiembre de 2023, se recibió la causa a prueba, resolución que fue notificada a las partes con fecha 28 de septiembre de 2023.

A **folio 48**, con fecha 17 de mayo de 2024, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 27 de febrero de 2021, Ricardo Domingo Medina Contreras, dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la detención ilegal y homicidio de que fue objeto su padre en el contexto de la dictadura militar.



SEGUNDO: Que, con fecha 9 de junio de 2023, el Consejo de Defensa del Estado, contestó la demanda interpuesta alegando la reparación integral del daño causado y, en subsidio, la prescripción extintiva, cuestionando también el monto solicitado.

TERCERO: Que, con fecha 26 de septiembre de 2023 se recibió la causa a prueba, estableciéndose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1) Daños sufridos por el actor, como consecuencia de los hechos que relata en la demanda. Forma en se han producido y hechos concretos en que se manifiestan. Hechos y circunstancias.

2) Efectividad que los daños reclamados en autos fueron íntegramente reparados por el Estado.

3) Efectividad que transcurrió el término de la prescripción sin interrupción ni suspensión de la acción ejercida en autos. Hechos y circunstancias.

CUARTO: Que, para acreditar sus afirmaciones, la demandante acompañó la siguiente documentación:

1) A folio 1, Copia de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en la causa de ingreso del máximo tribunal rol 62.036-2016, de fecha 10 de abril de 2017, la cual tiene su fuente mediata en la causa rol 2.182-98 “A” “Caravana”, Episodio “Copiapó”.

2) A folio 43, Certificado de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que certifica que don DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME, es víctima calificada de violación a los derechos humanos, de acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con firma electrónica, de octubre de 2023;

3) A folio 43, Certificado de Nacimiento de don RICARDO DOMINGO MEDINA CONTRERAS.

4) A folio 43, Certificado de nacimiento de don DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME.

5) A folio 43, Certificado de defunción de don DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME.

6) A folio 43, Documento intitulado “Víctimas de violaciones de Derechos Humanos: situaciones represivas y experiencias traumáticas”, elaborado por doña (“Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos”).

7) A folio 43, Documento intitulado “Consecuencias sobre la salud en familiares de ejecutados políticos”, elaborado por la doctora doña Nadia Saavedra (psiquiatra) y las psicólogas doña Ángela Pizarro y doña Flavia Taramasco;



8) A folio 43, Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013.

9) A folio 43, Fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas.

10) A folio 43, Fallo de casación en Episodio “Villa Grimaldi”, cuaderno “Marcelo Concha Bascuñán”. Rol N° 44074-2016;

11) A folio 43, Copia de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen II, Tomo 3.

12) A folio 45, Fallo dictado por la Excelentísima Corte Suprema en causa “Iribarren con Fisco de Chile”, Rol 99.422-2020-2015.

13) A folio 45, Fallo dictado en los autos caratulados “Garate con Fisco de Chile”, del 27° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-1112-2019, confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en los autos rol de ingreso numero 6671-2021.

QUINTO: Que, por su parte, la demandada a folio 21 solicitó oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe al Tribunal sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante don Ricardo Domingo Medina Contreras, cédula nacional de identidad N° 11.487.047-1 y toda otra persona en relación a la víctima don Domingo Manuel Medina Riquelme.

Dicho oficio fue respondido a folio 29, con fecha 10 de julio de 2023.

SÉPTIMO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1) Conforme a certificado de calidad de víctima, emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, acompañado a folio 43:

Que don Domingo Manuel Medina Riquelme detenta la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

2) Conforme al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen II, tomo 3:

Domingo Manuel Medina Riquelme, de 25 años de edad, fue detenido en la madrugada del 15 de octubre de 1973 junto a su hermano, en su domicilio de Villa Francia, por una patrulla compuesta por 5 militares y 1 carabinero. Ese mismo día fue ejecutado a las orillas de un canal en Santa Ana de Chena.

3) Conforme a certificado de defunción acompañado a folio 43:



Que don Domingo Manuel Medina Riquelme falleció el día 15 de octubre de 1973, por herida múltiple de bala.

4) Conforme a certificado de nacimiento, acompañado a folio 43:

Que don Ricardo Domingo Medina Contreras es hijo de Domingo Manuel Medina Riquelme.

OCTAVO: Que, los documentos individualizados son instrumentos públicos que, puestos en conocimiento de la contraria no fueron objetados, de manera que conforme al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 1700 del Código Civil, hacen plena prueba, o bien, instrumentos privados que puestos en conocimiento de la contraria no fueron objetados o cuyas objeciones fueron desechadas de manera que, conforme al N°3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1702 del Código Civil, hacen plena prueba.

NOVENO: Que, en cuanto a la denominada excepción de reparación integral que opone la demandada, por haber sido resarcido el actor tanto de manera pecuniaria como simbólica, lo cierto es que esta magistratura estima que los beneficios a que se ha hecho referencia no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”*.

De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta sentenciadora- con una reparación meramente simbólica.

DÉCIMO: Que, respecto a la excepción de prescripción, la demandada señala ser aplicable el plazo 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, el de 5 años establecido en el artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes.

Así, se procede a dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral respecto de los hechos materia de autos, que sea



aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad. Al efecto, ha de señalarse que, en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la referida imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

Por otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos. Así, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal.

Lo anterior ha sido apoyado por diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, en los que se ha señalado que “(...) [t]ratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental - que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de las excepciones opuestas por la demandada.

UNDÉCIMO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de los actores, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como ya se señaló, en base a la prueba documental acompañada en autos, se acreditó que don Domingo Manuel Medina Riquelme detenta la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En el informe se consignó que fue detenido en la madrugada del 15 de octubre de 1973 junto a su hermano, en su domicilio de



Villa Francia, por una patrulla compuesta por 5 militares y 1 carabinero. Ese mismo día fue ejecutado a las orillas de un canal en Santa Ana de Chena.

A su vez, se acreditó que el actor de autos, don Ricardo Domingo Medina Contreras es hijo de Domingo Manuel Medina Riquelme y que a la época del fallecimiento de su padre tenía cinco años de edad.

Que, estos hechos conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal y fallecimiento de don Domingo Manuel Medina Riquelme.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “[l]a fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural (...)”; “(...) su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena”.

El artículo 4 del DL N°5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna, intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que, cuando ha existido una violación a los derechos humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el



deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario.

DUODÉCIMO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia de los daños que la actora y que hace consistir en daño moral.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo o, como también señala la doctrina, el daño moral “consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).

DÉCIMO TERCERO: Que, teniendo en consideración lo anterior, es preciso tomar en cuenta que el daño moral que se alega por el actor resulta de dificultad probatoria por la propia naturaleza del perjuicio cuya reparación se pretende obtener por parte de la víctima.

Tal como señala la doctrina: *“Las limitaciones del lenguaje nos impiden transmitir nuestras sensaciones internas de pena, de aflicción física o de frustración. A lo más accedemos a lo que los otros sienten porque nosotros mismos nos hemos visto en situaciones semejantes o porque hemos descubierto por la experiencia en qué circunstancias ellas suelen manifestarse en signos exteriores. Por eso, la prueba del daño moral efectivamente sufrido por la víctima tiene algo de la pretensión de rasguñar un vidrio. Con todo, esa dificultad no puede ser tenida por impedimento de una prueba que permita inferirlo de los hechos de la causa (...) En circunstancias que el daño moral no puede ser objeto de una prueba directa, como el patrimonial, sino sólo puede ser inferido, el único medio de prueba disponible son las presunciones judiciales. En definitiva, de la circunstancia de que la prueba directa no sea posible, no se sigue que la prueba en lo absoluto no sea posible ni necesaria. Las presunciones tienen precisamente por antecedente ciertos hechos que permiten inferirlas (...) La cuestión se plantea*



en términos análogos respecto del daño reflejo, esto es, del dolor que se sufre por la muerte o las graves lesiones de un padre o hijo o de aquel con quien se convive. (...) Aunque sea normal que de la muerte del hijo o del padre se siga un perjuicio afectivo para quien sufre la pérdida, bien puede ocurrir que en el pleito se allegue prueba que muestre, por ejemplo, que el padre fallecido vivía en el abandono o la destitución material o afectiva; o que se pruebe que la persona cuya honra ha sido afectada ya tenía su prestigio severamente deteriorado. En otras palabras, aunque el daño moral se pueda inferir de los hechos más directos de la causa, esa presunción siempre debe ser tenida por provisoria, como es típico de las presunciones legales y judiciales.” (Barros, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. pp. 333-334).

De esta manera, recogiendo lo que ha sido planteado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, es que habiéndose acreditado por parte del actor la calidad de su padre de víctima de violación de derechos humanos y que su fallecimiento se produjo cuando el demandante era un infante, a manos de agentes del Estado que lo detuvieron de manera ilegal, es que a juicio de esta sentenciadora dichas circunstancias permiten construir una presunción acerca de la existencia y entidad del daño moral que se reclama, la que por reunir los caracteres de gravedad y precisión suficientes, constituye plena prueba al efecto, tal como preceptúa el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, a falta de otra prueba que fuera rendida por el demandante al efecto.

DÉCIMO CUARTO: Que, si bien el daño moral derivado del contexto que se ha reseñado resulta difícil de calcular y cuantificar, se hace necesario a fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo presente para ello la edad de la demandante al momento de los hechos y la evidente conmoción y afectación derivada de la situación descrita.

Atendido lo anterior y teniendo en cuenta que no existe una cantidad de dinero que permita reparar realmente los padecimientos sufridos, se regulará prudencialmente el monto en **\$70.000.000.-**

DÉCIMO QUINTO: Que, atendido el carácter declarativo de esta sentencia, las sumas a la que queda condenado el Fisco de Chile, por concepto de daño moral, devengarán reajustes, de acuerdo a la variación del Índice de Precio al Consumidor, desde que el presente fallo quede ejecutoriado y el mes que preceda su pago; e intereses corrientes aplicables al monto a indemnizar desde la mora y hasta el pago efectivo.

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida, y estimando



esta magistrada que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

- I. Que, **se rechazan las excepciones y defensas** deducidas por la demandada.
- II. Que, **se acoge parcialmente** la demanda interpuesta en lo principal de folio 1 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral la suma de \$70.000.000 (setenta millones de pesos) a don **Ricardo Domingo Medina Contreras** más los reajustes e intereses que corresponden según lo señalado en lo considerativo del fallo, desestimándose en lo demás.
- III. Que **cada parte soportará sus costas**.

Regístrese, notifíquese y archívense en su oportunidad.

Consúltense si no se apelare.

Rol N° C-2188-2021

Pronunciada por **Alejandra Pino Montero**, Jueza Interina del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Agosto de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKRYXPXDGVH